RECOMENDACIÓN No. 15/ 2015

Síntesis: Víctima del delito se queja que por negligencia y dilación de agentes del ministerio público, los jueces determinaron el no ejercicio de la acción penal, dejándolo en estado de indefensión, así como de obligarlo a pagar los daños causados por el agresor.

En base a las indagatorias, este organismo concluyó que existen evidencias suficientes para presumir la probable violación al derecho de legalidad y seguridad jurídica, en la modalidad de Procuración de Justicia.

Por tal motivo recomendó: **PRIMERA.- A usted, LIC. JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ NICOLÁS, Fiscal General del Estado,** se sirva girar sus instrucciones a efecto de que se instruya procedimiento dilucidatorio de responsabilidad en contra de los servidores públicos que hayan intervenido en los hechos referidos, en el que se consideren los argumentos y las evidencias analizadas en la presente resolución y en su caso, se impongan las sanciones que correspondan.

SEGUNDA.- A usted mismo, para que se analice y determine la efectiva reparación integral del daño ocasionado con motivo de la actividad administrativa irregular en perjuicio de "A", en la que se incluya la indemnización que a derecho corresponda, tomando en cuenta las evidencias y razonamientos esgrimidos en la presente resolución.

TERCERA.- Gire sus instrucciones a efecto de que se tomen las medidas administrativas necesarias, para garantizar la no repetición de actos violatorios como los aquí analizados consistentes en abstenerse de investigar hechos denunciados como posibles delitos, así mismo, para que las investigaciones se integren en tiempo y forma, garantizando en todo momento los derechos de las víctimas del delito.

Oficio No. JLAG 355/2015
Expediente No. KG 295/2013

RECOMENDACIÓN No. 15/2015

Visitador Ponente: Lic. Mariel Gutiérrez Armendáriz
Chihuahua, Chih., a 14 de julio de 2015

LIC. JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ NICOLÁS FISCAL GENERAL DEL ESTADO P R E S E N T E.-

Visto para resolver el expediente número KG 295/2013 y su acumulado CM 423/2013 del índice de la oficina en la ciudad de Chihuahua, instruido con motivo de la queja interpuesta por “A”¹ contra actos que considera violatorios de sus derechos humanos. De conformidad con lo previsto por el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 42 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se procede a resolver atendiendo al análisis de los siguientes:

I.- HECHOS:

1.- En fecha 21 de junio de 2013, se recibió escrito de queja en contra de la Fiscalía General del Estado por “A”, en los términos siguientes:

“...1.- Con fecha 8 de diciembre del 2009, “B” me robó dos vehículos de mi propiedad; uno de ellos, con las características siguientes: Marca Nissan, tipo TIIDA, modelo 2010, color azul. 2.- En el mes de abril de 2010, la concubina de “B” de nombre “C”, al conducir el vehículo de mi propiedad por la Ave Juan Pablo II de esta ciudad, provocó un accidente de tránsito, causándole daños materiales por un monto superior a los cien mil pesos. 3.- Con fecha 12 de julio de 2012, presenté escrito de denuncia de hechos, cometidos en mi perjuicio, por “C” que tipifican los delitos de daños y uso de vehículo robado. Dicha denuncia de hechos fue debidamente ratificada, ese mismo día, ante el Agente del Ministerio Público, que recibió el escrito respectivo. 4.- Posteriormente, en el mes de noviembre del 2013, la Agente del Ministerio Público, “D”, solicitó la formulación de imputación ante el Juez de Garantías, únicamente, por el delito de uso de vehículo robado en contra de “C”, sin hacer exigible de delito de daños. 5.- A la fecha, y a pesar

¹ Por razones de confidencialidad y protección de datos personales, este organismo considera conveniente guardar la reserva del nombre del quejoso, así como otros datos que pueden llevar a su identificación, los cuales se hacen del conocimiento de la autoridad mediante un anexo.

de estar debidamente acreditaba la responsabilidad de “C” en la comisión del delito de daños, el Ministerio Público fue totalmente omiso en ejercitar la pretensión punitiva por el delito de daños en comento, dentro del plazo de tres años establecido en el Art. 110 del Código Penal del Estado. Motivo por el cual la acción delictiva denunciada por el suscrito ha prescrito y en consecuencia, me resulta imposible reclamar la reparación del daño derivada de la conducta ilícita de “C”, misma que causó un daño considerable en el patrimonio del suscrito... (sic)”

“...Consideraciones jurídico-filosóficas que acreditan la violación de los derechos humanos: Primera.- La reprochable omisión de los agentes del Ministerio Público que conocieron de los hechos denunciados por el suscrito, referentes a los actos delictivos cometidos por “C” en mi perjuicio, se traduce en una flagrante violación a los derechos fundamentales de: a) acceso a la justicia; b) reparación del daño; c) investigación del delito; y d) principio del monopolio de la acción penal. En efecto, la omisión de la institución del Ministerio Público del Estado de realizar las indagatorias necesarias para acreditar, indiciariamente el cuerpo del delito cometido en mi perjuicio, conlleva a que el suscrito quede en total estado de indefensión para exigir, ante los tribunales judiciales, la reparación del daño patrimonial causado por la conducta dolosa de “C”. Lo anterior es así, toda vez que el ejercicio de la pretensión punitiva exigía, tan solo, acreditar al Juez de Garantía que de los antecedentes de la investigación se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, tal como lo sostiene el criterio jurisprudencia. Motivo por el cual el suscrito quedó en total estado de indefinición al quedar imposibilitado para reclamar la reparación del daño causado en mi patrimonio por la conducta delictiva de “C”... (sic)”

2.- Con fecha 15 de mayo de 2015, se acumuló el expediente CM 423/2013 al KG 295/2013, en razón a que en ambas quejas se atribuyen actos y omisiones a una misma autoridad y para efecto de no dividir las investigaciones, lo anterior de conformidad con los establecido en el artículo 49 del Reglamento Interno de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Teniendo entonces que el día 26 de septiembre de 2013 “A” presentó escrito de queja en contra de la Fiscalía General del Estado, en los siguientes términos:

“...1.- Con fecha 25 de enero del 2011, presenté una denuncia por el delito de FALSEDAD ANTE AUTORIDAD cometido por “B” al declarar falsamente ante la Jueza Sexto de lo Civil en un juicio mercantil promovido, dolosamente, en mi contra.

Dicha denuncia, penal fue radicado por el escrito ese mismo día.

5. *A la fecha, y a pesar de estar debidamente acreditada la responsabilidad de “B” en la comisión del delito de FALSEDAD ANTE AUTORIDAD, el Ministerio Público ha sido omiso en ejercitar la PRETENCION PUNITIVA por el delito en comento, durante más de dos años y medio.*

Motivo por el cual, la acción delictiva denunciada por el suscrito está próxima a prescribir y, en consecuencia, será imposible reclamar la reparación del daño derivada de la conducta ilícita de "B", misma que causó un daño considerable en el patrimonio del suscrito. (...).

PRIMERA.- La reprochable omisión de los agentes del Ministerio Público que conocieron de los hechos denunciados por el suscrito, referente a los actos delictivos cometidos por "B" en mi perjuicio se traduce en una flagrante violación a los derechos fundamentales de:

- a) Acceso a la justicia;*
- b) Reparación del daño;*
- c) Investigación del delito; y*
- d) Principio del monopolio de la acción penal.*

En efecto, la omisión de la Institución del Ministerio Público del Estado de realizar las indagaciones necesarias acreditar, indirectamente, el cuerpo del delito cometido en mi perjuicio, conlleva a que el suscrito quede en total estado de indefensión para exigir ante los tribunales judiciales, la reparación del daño patrimonial causado por la conducta dolosa de "B".

Lo anterior es así toda vez que el ejercicio de la pretensión punitiva es un requisito procedimental para suspender el plazo de prescripción y, además solo requiere acreditar al Juez de garantías que los antecedentes de la investigación "se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participo en su comisión, u no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación" (...).

Motivo por el cual el suscrito quedará, de manera cierta e inminente, en total estado de indefensión al quedar imposibilitado para reclamar, judicialmente, la reparación del daño causado por la conducta delictiva de "B".

(...)En su oportunidad, se emita la Recomendación correspondiente para enmendar la violación de los derechos humanos que me causa el proceder de los servidores públicos denunciados, condenándolos al pago de la reparación del daño, del cual me privó la omisión de ejercitar, oportunamente, la pretensión punitiva en contra de "B", por el delito de Falsedad ante Autoridad, cometido en mi perjuicio" (sic).

3.- Radicada la queja KG 295/2013 y solicitados los informes de ley, al Lic. Fausto Javier Tagle Lachica en su carácter de Fiscal Especializado en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, mediante oficio 1097/2013 de fecha 1 de octubre de 2013, manifiesta lo siguiente:

"(...) Principales actuaciones de la Fiscalía General del Estado. 1.- El día diez de diciembre del año 2009, "A", presentó denuncia ante la Unidad de Robo de Vehículo, denunciando el robo de dos vehículos, el primero de marca nissan, línea tiida, modelo

2009 y un vehículo marca honda línea accord, modelo 2009, ambos de su propiedad, manifestando que el día ocho de diciembre de ese mismo año, dentro de un juicio civil se llevó a cabo una diligencia de desalojo, sacándose los muebles del domicilio así como los vehículos que se encontraban en el exterior del mismo, de tal manera que arribó el grupo denominado el Barzón encabezado por "A", a interrumpir la diligencia no permitiendo que se llevara a cabo, por lo que el Actuario le solicita al apoderado actor, "B", la devolución de los muebles incluyendo los vehículos, a lo que "B" no accedió, llevándose los mismos a un lugar desconocido. 2.- En fecha treinta de diciembre de dos mil nueve, comparece "A" a fin de acreditar la propiedad de los vehículos que denunció como robados. 3.- El veinticinco de enero de dos mil diez, fue decretado por parte del Coordinador de la Unidad de Robo de Vehículos acuerdo de no Ejercicio de la Acción Penal. Determinación que fue impugnada ante el Tribunal de Garantía, siendo reapertura la investigación el cuatro de marzo de dos mil diez, turnándose a la Unidad Especializada de Delitos Contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia. 4.- Obra en autos con fecha veinticuatro de marzo de dos mil diez, valorativa comercial realizada por perito adscrito a la Fiscalía General quien informa el valor comercial de los automóviles en cuestión. 5.- El veintiuno de junio de dos mil diez, se llevó a cabo el aseguramiento del vehículo Nissan Tiida modelo 2009, en un taller autorizado por la compañía de seguro luego de haber participado en un accidente automovilístico el cinco de abril de dos mil diez, mismo que manejaba "C", pareja sentimental de "B". 6.- El doce de julio del año dos mil doce, "A" presentó denuncia de hechos por los delitos de robo de vehículo y daños. 7.- El dieciocho de mayo de dos mil once, acuerdo signado por la Coordinadora de la Unidad Especializada en Delitos Contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia, donde establece que se da vista de la carpeta de investigación a la Unidad de Robo de Vehículo para que continúen conociendo de la investigación. 8.- El dieciocho de octubre del año dos mil once, recibe la carpeta de investigación "E" por la actual encargada de la misma. 9.- El veintitrés de octubre de dos mil doce se llevó a cabo audiencia de formulación de imputación dentro de la causa penal "F" ante Juez de Garantía del Distrito Judicial Morelos, relativa a "C". 10.- En fecha 29 de octubre de dos mil doce, se llevó a cabo audiencia de vinculación a proceso, en la que el Juez de Garantía del Distrito Judicial Morelos vinculó a proceso a "C", por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo. Esto soslayando que el autor del delito de robo de vehículo se encontraba plenamente identificado como el autor del ilícito razón por la cual se le seguía una investigación precisamente por esos hechos, por lo que la exigibilidad de la reparación de los daños que pudiera sufrir el automotor es atribuible de manera directa a "B". 11.- El trece de noviembre de dos mil doce el defensor penal público presentó el recurso de apelación en contra de la resolución de vinculación a proceso de "C", por lo que se decretó la no vinculación a proceso de la ciudadana, razón por la cual se tomó imposible exigirle a la imputada el pago de la reparación de los daños ocasionados al vehículo. 12.- En el pliego de acusación presentada el veintinueve de noviembre de dos mil doce, por el Agente del Ministerio Público en contra de "B", se solicitó como pago de la reparación del daño la cantidad de \$ 352,889.36 (trescientos cincuenta y dos mil ochocientos ochenta y nueve pesos 36/100) a favor de "A" y "A1". 13.- En la sentencia de juicio oral, el nueve de marzo de dos mil doce, el Tribunal Oral condenó a "B" por el delito robo en su forma básica, imponiéndole una pena consistente en 5 años de prisión, multa de \$ 10,390.00, negándole el beneficio de la condena condicional. 14.- El

veintidós de octubre de dos mil doce, la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en relación al expediente de casación “G” formado con motivo del recurso interpuesto por el sentenciado “B” contra la sentencia condenatoria, pronunciada en su contra, el juicio oral número “H” (derivado de la causa penal “I”) como responsable del delito de Robo Agraviado resolvió lo siguiente: se impone a “B” la pena consistente en un año tres meses de prisión y dos mil quinientos setenta y cinco pesos 00/100 de multa. Se condena a “B” al pago de la reparación del daño (...) Propositiones fácticas (...) 3) El día diez de diciembre del año 2009, “A”, presentó denuncia ante la Unidad de Robo de Vehículo. Se llevó a cabo audiencia de formulación de imputación dentro de la causa penal “F” ante el Juez de Garantía del Distrito Judicial Morelos, relativa a “C”, se llevó a cabo audiencia de vinculación a proceso a “C”, por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo. 4) El trece de noviembre de dos mil doce el defensor penal público presentó el recurso de apelación en contra de la resolución de vinculación a proceso de “C”, por lo que se decretó la no vinculación a proceso de la ciudadana, razón por la cual se tornó imposible exigirle a la imputada el pago de la reparación de los daños ocasionados al vehículo. 5) En la sentencia de juicio oral, el nueve de marzo de dos mil doce, el Tribunal oral condenó a “B” por el delito de robo en su forma básica, imponiéndole una pena consistente en 5 años de prisión, multa de \$ 10,390.00, negándole el beneficio de la condena condicional... (sic).”

4.- En lo que respecta a la queja CM 423/2013, la autoridad no respondió los oficios CM 207/2013, CM 247/2013, CM 259/2013, en los cuales se solicitó los informes de ley. Al respecto, este organismo recibió el día 14 de enero de 2014, oficio número FEAVOD/UDH/CEDH/58/2014, signado por el licenciado Francisco Sánchez Villegas, solicitando iniciar un proceso conciliatorio dentro del expediente de queja citado en este párrafo.

II.- EVIDENCIAS:

5.- Escritos de queja presentados por “A”, en contra de la Fiscalía General del Estado, de fecha 21 de junio de 2013 y 26 de septiembre de 2013, mismos que quedaron debidamente transcritos en los puntos 1 y 2 (fojas 1 a 7 y 204 a 209). Anexos

5.1- Copia simple de denuncia de hechos presentada por “A” ante el agente del Ministerio Público por los delitos de robo de vehículo y daños (foja 8 a 10).

5.2- Copia simple de denuncia de hechos presentada por “A” ante el agente del Ministerio Público por el delito de falsedad ante la autoridad (foja 210 a 213).

6.- Ampliación de queja presentada por “A”, misma que se recibió el 01 de julio de 2013 (fojas 15 a 17).

7.- Acuerdo de radicación y calificación de la queja por posibles violaciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica (foja 18 y 19).

8.- Escrito presentado por “A” de fecha 5 de julio de 2013, al cual le anexa copia simple del Auto de Vinculación a proceso dictado en contra de “C”, por el delito de uso de vehículo robado, en la Causa Penal No. “F” (fojas 20 a 30).

- 9.- Solicitud de informes realizada mediante oficio KG 218/2013 al Lic. Fausto Tagle Lachica, Fiscal Especializado en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito de fecha 5 de junio de 2013 (fojas 32 y 33).
- 10.- Solicitud de informes realizado en oficio KG219/2013 AL Lic. Jesús Belis González, Coordinador de la Unidad de Investigación en Delitos de Robo de Vehículos (fojas 34 y 35).
- 11.- Oficio número KG 276/2013, en el cual se hace recordatorio de solicitud de informes al Fiscal Especializado en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito (foja 36 y 37).
- 12.- Oficio número KG 277/2013, en el cual se hace segundo requerimiento de informes de queja al Coordinador de la Unidad de Investigación en Delitos de Robo de Vehículos (fojas 38 y 39)
- 13.- Contestación a solicitud de informes mediante oficio No. 1097/2013 de fecha 1 de octubre de 2013, misma que quedó transcrita en el punto 3 de la presente resolución (fojas 40 a la 46).
- 14.- Acuerdo de contestación de la autoridad sin pruebas elaborado por la Primera Visitadora de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de fecha 7 de octubre de 2013 (fojas 47 y 49).
- 15.- Complemento de oficio de fecha 11 de octubre de 2013, mediante oficio número KG 270/2013 dirigido a la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito (fojas 50 y 51).
- 16.- Notificación al quejoso de la contestación de la autoridad, mediante acuerdo de fecha 17 de octubre de 2013, concediéndole un plazo de quince días naturales para que manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca pruebas de su dicho (foja 52).
- 17.- Vista que da el quejoso a la respuesta de la autoridad el 5 de noviembre de 2013 (fojas 53 y 54).
- 18.- Respuesta de la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito de fecha 19 de octubre de 2013, complementando de oficio que se le solicitó (fojas 56 a la 61).
- 19.- Oficio número KG 58/2014 de fecha 11 de febrero de 2014, dirigido al Fiscal Especializado en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, mediante el cual se solicita: copia certificada de la causa penal "F". Resolución de recurso de apelación de "C" presentado en fecha 13 de noviembre de 2013. Resolución de fecha 22 de octubre de 2012 de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en relación al expediente de casación C19/2012 formado con motivo del recurso

interpuesto por el sentenciado “B”, contra la sentencia condenatoria pronunciada en su contra en el Juicio Oral “H” derivado de la Causa Penal “I” (fojas 64 y 65).

20.- Contestación a solicitud realizada en el punto anterior, de fecha 24 de febrero de 2014 (foja 66).

21.- Oficio número KG 127/2014 de fecha 4 de abril de 2014, dirigido al Magistrado, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (foja 68).

22.- Respuesta a solicitud realizada en el punto anterior, mediante oficio 4688/2014 (fojas 69 a la 177).

23.- Acta circunstanciada, de fecha 17 de diciembre de 2014, la cual describe la reunión que se llevó a cabo en las oficinas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a efecto de llevar a cabo acuerdo conciliatorio entre quejoso y autoridad (fojas 180 a 182).

24.- Escritos que presenta el hoy quejoso de fecha 9 de febrero de 2015 (visible a foja 182).

25.- Oficio número KG 009/2015, dirigido al Fiscal Especializado en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, en el cual se solicitó avances del acuerdo conciliatorio precisado en el punto 17 de la presente resolución (fojas 185 y 186).

26.- Respuesta del Fiscal al oficio anterior inmediato (fojas 188 a 191).

27.- Escrito de fecha 14 de mayo de 2015 presentado por “A”, el cual solicita la acumulación del expediente CM 423/2013, al de la presente resolución (fojas 193 a 194). Anexo

27.1- Resolución de no ejercicio de la acción penal por prescripción (fojas 195 a 201).

28.- Oficio CHI-MGA 162/2015, en el cual se envía expediente CM 423/2013 mismo que consta de 55 fojas para acumulación (fojas 202 a 203).

29.- En relación al expediente CM 423/2013, se tienen oficios CM 207/2013, CM 247/2013, CM 259/2013, de solicitud de informes dirigidos al Fiscal Especializado en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, de los que a la fecha no se ha recibido respuesta (fojas 215, 217 y 259).

30.- Oficio número FEAVOD/UDH/CEDH/58/2014 recibido por este organismo el día 14 de enero de 2014, signado por el licenciado Francisco Sánchez Villegas, solicitando iniciar un proceso conciliatorio (foja 220).

31.- Acta circunstanciada de fecha 29 de enero de 2014, en la cual quedo asentada diligencia de conciliación (foja 222 y 223).

32.- Constancia en la cual se tiene por recibido copia simple de la resolución de no ejercicio de la acción penal por inexistencia de delito (fojas 225 a 234).

33.- Acuerdo de archivo emitido en el expediente CM 423/2013 (fojas 237 a 239).

34.- Escrito de fecha 27 de mayo de 2014 presentado por "A", en el cual refiere entre otras cosas que el día 25 de marzo de 2014, en la causa penal "F2", el Juez de Garantía decretó la prescripción del delito de falsedad ante la autoridad judicial, agregó copia certificada de la resolución referida (fojas 245 a 253).

35.- Acuerdo de fecha 06 de junio de 2014, en el cual se determina la reapertura del expediente CM 423/2013 (foja 254). Acta circunstanciada de fecha 27 de noviembre de 2014, en la cual se asienta entrevista con "A" (foja 255).

36.- Acuerdo de fecha 18 de mayo de 2015, mediante el cual se ordena cierre de la etapa de investigación y emitir la resolución correspondiente (foja 258).

III.- CONSIDERACIONES:

37.- Esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos es competente para conocer y resolver en el presente asunto atento a lo dispuesto por el artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1º, 3º, y 6º fracción II inciso A), de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

38.- Según lo previsto por el artículo 42 de la Ley de marras, resulta procedente por así permitirlo el estado que guarda la tramitación del presente asunto, analizar los hechos, los argumentos y los elementos de convicción emanados de las diligencias practicadas, a fin de determinar si los servidores públicos han transgredido o no, los derechos humanos de "A", al haber incurrido en omisiones o actos ilegales o injustos, por lo que las pruebas recaudadas durante la investigación, deberán ser evaluadas en su conjunto, de acuerdo a los principios de la lógica y experiencia, con estricto apego a la legalidad que demanda nuestra Carta Magna en su artículo 16, para una vez realizado ello, se pueda producir convicciones sobre los hechos materia de la presente queja.

39.- Entre las facultades de este organismo establecidas en el artículo 34 de la Ley que lo rige, se encuentra el procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como responsables, sin embargo, de las constancias que obran en el expediente, no se desprenden resultados en tal sentido, con lo que implícitamente se entiende agotada la posibilidad de un acuerdo en dicha vía.

40.- Corresponde analizar si los hechos planteados por los quejosos, quedaron acreditados y determinar si los mismos causaron perjuicio o lesión de los derechos fundamentales, derivado de los actos u omisiones provenientes de servicios públicos de la Fiscalía General del Estado.

41.- Del estudio de los diversos elementos de convicción que obran en el expediente en el que se actúa, mismos que quedaron descritos en el capítulo de evidencias, podemos concluir de manera indubitable que “A” denunció hechos constitutivos de posible delito de falsedad ante autoridad y daños en su perjuicio.

42.- En lo que respecta al primer delito mencionado en el párrafo anterior, “A” detalló que el día 12 de julio de 2012, presentó escrito de denuncia por los delitos de daños y uso de vehículo robado en su perjuicio en contra de “C”, en la integración de la investigación no se exigió la reparación del daño.

43.- Al respecto, en el informe que rinde la autoridad confirman la presentación de la denuncia de hechos mencionada en el párrafo anterior (foja 41), así mismo, se notifica que el día 29 de octubre de 2012, se llevó a cabo audiencia de vinculación a proceso, en la cual el Juez de Garantía resolvió vincular a proceso a “C” por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo. Detallando que la reparación de los daños se exigirá al autor del robo del vehículo quien está plenamente identificado (foja 42).

44.- En el mismo informe, la autoridad precisa que se tornó imposible exigir a “C”, el pago de la reparación de los daños ocasionados al vehículo, toda vez que en el recurso de apelación promovido por la imputada se decretó la no vinculación a proceso.

45.- De las evidencias que obran en el expediente, se tiene copia certificada de la resolución dictada dentro de la causa penal “F” (foja 75), en la cual se confirma la vinculación a proceso en contra de “C” por el delito previsto en el artículo 212 bis fracción VI. Al igual, se recabó copia certificada del toca F1, resuelto por el Magistrado de la Tercera Sala Penal, en la cual determina no vincular a proceso a “C”.

46.- Quedando demostrado la inconformidad del impetrante, en el sentido de que el representante social no investigó lo denunciado. Es importante mencionar que en la diligencia de conciliación celebrada el día 17 de diciembre de 2014, mencionaron diversas carpetas de investigación pendientes de concluir, pero no hizo referencia a la denuncia por daños en contra de “C”, por lo tanto no se logró la conciliación.

47.- Al no tener datos que evidencien la actuación del representante social en el sentido de hacer valer los derechos de las víctimas del delito sobre la reparación de daños y perjuicios, previstos el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos inciso C, fracción IV, como lo fue solicitado por “A” en la denuncia y/o querrela presentada al Ministerio Público (fojas 8 a 10), se hacen nugatorios los derechos humanos contenidos en la propia Constitución y Tratados Internacionales.

48.- En lo que respecta al expediente CM 423/2013, como quedó asentado, la inconformidad de “A” se dio por el hecho de que en el término de dos años y medio el representante social no ejerció pretensión punitiva en contra de “B” por el delito de falsedad ante autoridad. Dejando claro que la autoridad no respondió las solicitudes de informes, posteriormente con fecha 29 de enero de 2014, se realizó audiencia de conciliación, no solucionando la queja se fijó nueva fecha.

49.- Al escrito de queja, el impetrante anexó copia simple de la denuncia realizada ante el agente del Ministerio Público, de la cual se puede percibir que fue recibida el día 25 de enero de 2011. En este mismo tenor, el día 07 de febrero de 2014, “A” aportó como evidencia de su inconformidad, la resolución de no ejercicio de la acción penal por inexistencia del delito, quedando entonces acreditado el transcurso de tres años, trece días, para concluir la integración de la carpeta de investigación.

50.- Siendo relevante lo manifestado por “A” en el escrito de fechas 27 de mayo de 2014, en la cual precisa que presentó recurso sobre la determinación del agente del Ministerio Público de no ejercer acción penal, resolviéndose en la causa penal “F2”, en la cual se determinó la extinción de la causa penal, toda vez que el término medio del delito denunciado ocurrió el 26 de junio de 2013.

51.- Es prudente señalar, que este organismo no realiza pronunciamiento alguno sobre las determinaciones realizadas por el agente del Ministerio Público, pues ello no nos compete. De tal manera que en esta resolución se analizan violaciones a los derechos humanos por actos contra la procuración de justicia, específicamente por omitir investigar hechos denunciados y retardar el trámite de la carpeta de investigación.

52.- Teniendo entonces demostrado que el agente del Ministerio Público quedó enterado de la posible existencia de un delito, esto con el escrito de las denuncias presentadas por “A”, en consecuencia, el representante social como órgano de procuración de justicia debe velar por el acceso de las víctimas u ofendidos a los tribunales y a las garantías judiciales. Debiendo entender entonces, que durante la integración de la carpeta de investigación, se debe recabar los datos de prueba para acreditar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado, con ello sostener la existencia del ilícito y la probabilidad que el imputado haya participado en éste.

53.- En relación a lo anterior, el artículo 106 del Código de Procedimientos Penales del Estado, establece que el Ministerio Público practicará u ordenará todos los actos de investigación necesarios para descubrir la verdad sobre los hechos materia de la denuncia o querrela.

54.- En similares circunstancias, el numeral 109 del Código mencionado en el párrafo anterior, precisa que: *“El agente del Ministerio Público debe obrar durante todo el proceso con absoluta lealtad para el imputado y su defensor, para el ofendido y para los demás intervinientes en el proceso. La lealtad comprende el deber de información veraz sobre la investigación cumplida y los conocimientos alcanzados, y el deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando ha resuelto no incorporar alguno de esos elementos al proceso. En este sentido, su investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo, procurando recoger con urgencia los elementos de convicción, y actuando en todo momento conforme a un criterio objetivo, con el fin de determinar, incluso, el no ejercicio de la acción penal o el sobreseimiento...”*.

55.- También como atribución del representante social, es el de vigilar que los derechos de las víctimas sean adecuadamente tutelados, como lo prevé el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. En consecuencia, encontramos que la autoridad no justificó el motivo por el cual no inició la investigación de los hechos denunciados por el delito de daños, así mismo, no dio a conocer que obstaculizó la investigación sobre el delito de falsedad ante autoridad y con ello prescribiera la acción penal en perjuicio de "A".

56.- La posibilidad de toda persona, independientemente de su condición económica o de otra naturaleza, de acudir al sistema previsto para la resolución de conflictos y vindicación de los derechos protegidos de los cuales es titular, es una garantía prevista en las normas nacionales como internacionales, es decir, por principio podemos entender que ante una controversia o la necesidad del esclarecimiento de un hecho, se tiene la posibilidad de llegar a los tribunales buscando la protección de ciertos derechos, por tanto, no se debe interponer obstáculos para que las personas accedan a la justicia.

57.- A saber, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado de manera sistemática con el artículo 1o. de la Ley Fundamental, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, que entró en vigor al día siguiente, estableciendo que el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita².

58.- Este derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, se encuentra también puntualizado en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, cuyo decreto promulgado se publicó el 07 de mayo de 1981 en el Diario Oficial de la Federación.

59.- De manera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha abordado este tema desde diversos ángulos. En relación con los elementos que deben tomarse en cuenta para determinar si un plazo judicial es o no razonable, la Corte ha señalado que para examinar la razonabilidad del proceso según los términos del artículo 8.1 de la Convención, se debe tomar en cuenta tres elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales (Acosta Calderón vs Ecuador, párrafo 105)³.

60.- En cuanto a una demora prolongada, la Corte ha dicho que puede llegar a constituir por sí misma, en ciertos casos, una violación de las garantías judiciales. Corresponde al Estado exponer y probar la razón por la que se ha requerido más tiempo que el que sería razonable en principio para resolver en definitiva un caso

² Criterio sostenido jurisprudencialmente por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de su índice, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES".

³ http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_129_esp1.pdf.

particular, de conformidad con los criterios indicados (Caso 19 Comerciantes vs Colombia, párrafo 191) ⁴.

61.- A la luz de las obligaciones generales consagradas en los artículos descritos en el párrafo que antecede, el deber de tomar las providencias de toda índole para que nadie sea sustraído de la protección judicial, por ello, el párrafo tercero del artículo 1 de la misma Constitución, el cual establece la obligación de la autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible que permita el más amplio acceso a la impartición de justicia conforme al principio *pro homine o pro persona*.

62.- De manera tal, que se debe dilucidar si se ha contravenido lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua, de que todo servidor público para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, con independencia de sus deberes y derechos laborales, tendrá entre otras, la obligación de cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. De tal suerte que pueden haber incurrido en responsabilidad administrativa, circunstancia que deberá analizarse dentro del procedimiento que para tal finalidad se instaure.

63.- En ese tenor este Organismo Resoluto, determina que obran en el sumario, elementos probatorios suficientes para evidenciar que Servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, ejercieron una actividad administrativa irregular y que por lo tanto le corresponde a la Fiscalía el resarcimiento de la reparación del daño a favor de "A", conforme a lo establecido en los artículos 1º, párrafo I y III y 113, segundo párrafo de nuestra Constitución General; 178 de la Constitución del Estado de Chihuahua; 1, 2, 13 y 14 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Chihuahua; 1, párrafo tercero y cuarto, 2, 7, fracción II, 12, 26, 65 inciso C y 69, fracción III de la Ley General de Víctimas, La Fiscalía General del Estado, tiene el deber ineludible de proceder a la efectiva restitución de los derechos fundamentales referidos por el quejoso, a consecuencia de una actividad administrativa irregular, por los hechos sobre los cuales se inconformó "A", mismos que quedaron plenamente acreditados.

64.- Dentro de ese contexto, y considerando que conforme a lo dispuesto los artículos 3 y 25 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, resulta procedente dirigirse al Fiscal General del Estado, a efecto de que se inicie procedimiento dilucidatorio administrativo en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos de la presente resolución.

65.- Atendiendo a los razonamientos y consideraciones antes detallados, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos estima que a la luz del sistema de

⁴ http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_114_esp.pdf.

protección no jurisdiccional, se desprenden evidencias para considerar violados los derechos fundamentales de "A", específicamente los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, por actos contra la procuración de justicia, en consecuencia, respetuosamente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 y 44 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, resulta procedente emitir las siguientes:

IV.- RECOMENDACIONES:

PRIMERA.- A usted, LIC. JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ NICOLÁS, Fiscal General del Estado, se sirva girar sus instrucciones a efecto de que se instruya procedimiento dilucidatorio de responsabilidad en contra de los servidores públicos que hayan intervenido en los hechos referidos, en el que se consideren los argumentos y las evidencias analizadas en la presente resolución y en su caso, se impongan las sanciones que correspondan.

SEGUNDA.- A usted mismo, para que se analice y determine la efectiva reparación integral del daño ocasionado con motivo de la actividad administrativa irregular en perjuicio de "A", en la que se incluya la indemnización que a derecho corresponda, tomando en cuenta las evidencias y razonamientos esgrimidos en la presente resolución.

TERCEA.- Gire sus instrucciones a efecto de que se tomen las medidas administrativas necesarias, para garantizar la no repetición de actos violatorios como los aquí analizados consistentes en abstenerse de investigar hechos denunciados como posibles delitos, así mismo, para que las investigaciones se integren en tiempo y forma, garantizando en todo momento los derechos de las víctimas del delito.

La presente recomendación, de acuerdo con lo señalado por el artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y con tal índole se publica en la Gaceta de este organismo, y se emite con el propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto a una conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualesquiera otras autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.

Las recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no pretenden, en modo alguno, desacreditar a las instituciones, ni constituyen una afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, por el contrario, deben ser concebidas como instrumentos indispensables en las sociedades democráticas y en los estados de derecho, para lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridades y servidores públicos ante la sociedad. Dicha legitimidad se robustecerá de manera progresiva cada vez que se logre que aquellas y éstos, sometan su actuación a la norma jurídica y a los criterios de justicia que conlleven el respeto a los derechos humanos.

En todo caso, una vez recibida la recomendación, la autoridad o servidor público de que se trate, informará dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si se acepta. Entregará en su caso en otros quince días adicionales las pruebas correspondientes de que se ha cumplido, ello según lo establecido en el artículo 44 de la ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

La falta de respuesta dará lugar a que se interprete que la misma no fue aceptada. En caso de que se opte por no aceptar la presente recomendación, le solicito en los términos del artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que funde, motive y haga pública su negativa.

No dudando de su buena disposición para que la presente sea aceptada y cumplida.

A T E N T A M E N T E

**LIC. JOSÉ LUIS ARMENDÁRIZ GONZÁLEZ
P R E S I D E N T E**